



Proceso	Verbal
Demandantes	Flor María del Socorro Jaramillo Lopera y otros
Demandados	Liberty Seguros S.A. y otros
Radicado	05001 31 03 020 2021 00220 01
Procedencia	Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 066
Decisión	Confirma.
Tema	Inscripción de la demanda en procesos de responsabilidad civil
Subtema	<p>“...Como se observa, el legislador circunscribió los requisitos para la inscripción de la demanda, a los señalados en las disposiciones transcritas; de modo que no consideró necesario imponer el estudio de la <i>“apariencia del buen derecho”</i> ni los demás requisitos previstos en el inciso tercero del literal c) para su acogimiento en los temas o asuntos donde se admite su petición y decreto, como en los de responsabilidad civil...”</p> <p>Así las cosas, no era obligatorio para el juez de instancia realizar el estudio de apariencia de buen derecho, necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, como si se tratara del decreto una medida cautelar de las llamadas <i>“innominada”</i>, cuyo régimen es distinto al edificado para la <i>“inscripción de la demanda”</i>.</p>

2020- 080

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, doce (12) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Por apelación que interpusiera la vocera judicial de Liberty Seguros S.A., conoce y decide el Tribunal sobre el mérito del auto de julio 21 último, proferido por el Juzgado Veinte Civil del Circuito

de esta ciudad, que admitió la demanda de responsabilidad civil extracontractual instaurado por María del Socorro Jaramillo Lopera, Rafael Ignacio, Eriberto y Katty Margarita Martínez Jaramillo contra Mauricio Gómez Holguín, Carlos Alberto Ramírez Zuluaga, Liberty Seguros S.A. y Transportes Medellín Castilla., y se decretaron las medidas cautelares pedidas por la parte demandante, en la que se encuentran bienes de la recurrente.

I. ANTECEDENTES

a) Ante el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta ciudad, se tramita proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual seguido entre las partes ya referidas, el cual se admitió por auto del 12 de julio de 2021, y se decretaron como medidas cautelares, la inscripción de la demanda sobre los inmuebles con matrículas 001-1054516, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur y 50S-271591 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, denunciados como de propiedad de Liberty Seguros S.A.

b) Frente a dicho proveído la apoderada de la entidad aseguradora interpuso recurso de reposición y apelación de manera subsidiaria, pues a su criterio la medida decretada por el juez de instancia no cumple con los presupuestos de necesidad y proporcionalidad de que trata el artículo 590 del CGP, concretamente, porque se trata de una aseguradora legalmente constituida y consolidada que, además, cuenta con reservas técnicas para la garantía de los valores asegurados, así como el hecho de que en este caso se cuenta con una póliza de responsabilidad civil que garantiza siniestros como el que dio

lugar al presente trámite. Bajo esos argumentos solicita la revocatoria de la medida cautelar adoptada o, en su defecto, se fije caución para el levantamiento de las cautelas.

c) El juez se mantuvo en su postura, y concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria, pues dijo que no se apreciaba viable que en los casos descritos en los literales a) y b) del artículo 590 del Código General del Proceso, el juez debiera valorar si una solicitud de medida cautelar que colmaba los requisitos específicos descritos en la norma, es necesaria o proporcional, pues dijo que el legislador, en ejercicio de facultad de configuración, delineó en qué casos es posible el decreto de la inscripción de la demanda y, a su vez, también estableció bajo qué condiciones se puede ordenar el levantamiento o cesación de la misma.

Argumentó que, ello tiene fundamento en el entendido de que el legislador, al momento de definir qué medidas cautelares pueden ordenarse en un procedimiento judicial, es decir, al estructurar el cuerpo normativo debió abordar el análisis de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto que “La actividad del legislador se ajusta a la carta política si atiende: (i) principios y fines del Estado como la justicia y la igualdad; (ii) la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos el debido proceso; (iii) los principios de razonabilidad y proporcionalidad al establecer las normas respectivas...”

Situación contraria, expresó, se presentaba con las medidas cautelares innominadas, pues en estos eventos el legislador no enlistó aquellas a las que pueden acudir las partes o el juez oficiosamente, y siendo así, al no haber sido objeto de examen de

razonabilidad y proporcionalidad al que son sometidas las medidas cautelares nominadas, dicha labor corresponderá emprenderla al juez en cada caso específico.

Sustentó el juez de instancia que el aparte normativo que la recurrente cita para sustentar su impugnación lo circunscribió al literal c) del artículo referido, y, en ese orden, consideró improcedente disponer el levantamiento de la medida cautelar de inscripción de la demanda -decretada en este caso al amparo del literal b) del artículo 590 mencionado.

II. CONSIDERACIONES

1. El legislador del Código General del Proceso de cara a las medidas cautelares, tiene sentado que quien se presenta como titular de un derecho formalmente probado lo hace exigible a través de la jurisdicción, por lo que *“pretenderá satisfacer la obligación a su favor recurriendo al patrimonio completo de su deudor, persiguiendo mediante la práctica de medidas cautelares todos y cada uno de los bienes que lo conforman, en la medida en que este, según lo previsto por el artículo 2488 del Código Civil, es “prenda general de los acreedores. Así pues, se puede concebir como una acción personal en contra del deudor” (ib), la que cobra pleno vigor en la legislación procesal actual, a tal punto que no se exige el otorgamiento de caución para el decreto de aquella, es decir, se considera que ese derecho formalmente probado, constituye, es suficiente para que se cumpla con la exigencia de la apariencia de buen derecho o *fumus bonis iuris*.*

2. La doctrina constitucional enseña que para el decreto de las medidas cautelares no es necesario la previa definición y

certidumbre jurídica sobre la existencia y exigibilidad de la responsabilidad jurídica que se pretende garantizar, puesto que tales conceptos resultan de la decisión definitiva del proceso. Con todo debe contarse con elementos de prueba suficientes que puedan razonablemente respaldar el decreto de las medidas, pues de otra manera la decisión sería arbitraria o caprichosa y constituiría verdadero lesionamiento del derecho al debido proceso del accionado.

3. Así, las medidas cautelares han sido creadas como una herramienta por medio de la cual, se asegurare el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas, y están encaminadas a propender la conservación del patrimonio del demandado, en caso de que prosperen las súplicas del demandante, evitando con ello los eventuales efectos desfavorables que puedan suscitarse ante la tardanza de los litigios.

En el Código General del Proceso se encuentran reglamentadas en el artículo 590, y sobre la procedencia de la inscripción de la demanda en procesos declarativos, establece:

“1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

“a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.

“Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.

“b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.

“Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella (...)” (subraya fuera de texto).

Lo anterior evidencia que la citada medida tiene lugar, en procesos declarativos, cuando en éstos (i) se discute el dominio u otro derecho real principal “(...) *directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra*”; (ii) se debaten cuestiones relativas a “*una universalidad de bienes*”; **y (iii) se busca el pago de perjuicios derivados de la responsabilidad civil contractual o extracontractual.** (Negrillas intencionales)

En torno a dicha medida es importante precisar que tiene como finalidad alertar a los terceros adquirentes de un bien sobre el cual recae el registro, que éste se halla en litigio, debiendo entonces, atenerse a los resultados de la sentencia que en él se profiera, y dada su naturaleza no sustrae el bien del comercio ni produce los efectos del secuestro, pero si tiene la virtud de aniquilar todas las anotaciones realizadas con posterioridad a su inscripción, que conlleven transferencias de dominio, gravámenes, y limitaciones a la propiedad; siempre y cuando, en el asunto donde se profirió la misma, se dicte fallo estimatorio de la pretensión que implique, necesariamente, cambio, variación o alteración en la titularidad de un derecho real principal u otro accesorio sobre el bien.

3. En el presente asunto se trata de un proceso declarativo de responsabilidad civil contractual y extracontractual, en el cual se solicita el pago de perjuicios causados a los demandantes derivados de accidente de tránsito ocurrido el día 6 de marzo del 2019 en la carrera 81 y 83 por calle 97, barrio Doce de Octubre del municipio de Medellín, en el cual resultó lesionada la demandante Flor María del Socorro Jaramillo Lopera. El actor con fundamento en el artículo 590 literal b) solicitó, entre otras cautelas, la inscripción de la demanda sobre dos bienes de propiedad de Allianz Seguros.

Se duele la recurrente que el juez en el decreto de la cautela no tuvo en cuenta la necesidad y la proporcionalidad de la misma, y que debió analizar situaciones particulares de la persona en quien recaía la medida, pues dice que por ser una entidad aseguradora intrínsecamente comporta una garantía en sí misma, no solo por la responsabilidad empresarial y la clara consolidación en el mercado de seguros al interior del país, sino también porque la existencia de la póliza especial para vehículos pesados Nro. 239900, tiene un objetivo claro que es el amparo y cobertura de siniestros dentro del presente asunto.

Tales planteamientos no alcanzan el fin pretendido pues como lo dijo el juez de instancia, y avala el Tribunal, no es necesario que el juez valore si la solicitud de medida cautelar que colma los requisitos específicos descritos en la norma, reúne las características de necesidad o proporcional, en tanto el legislador, en ejercicio de facultad de configuración, delineó en qué casos es posible el decreto de la inscripción de la demanda y, a su vez, también estableció bajo qué condiciones se puede

ordenar el levantamiento o cesación de la misma, como si lo hizo al regular las medidas cautelares innominadas, novedad en la legislación procesal actual, para la cual exigió el estudio previo de la apariencia de buen derecho, necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, como si se tratara del decreto una medida cautelar de las llamadas “*innominada*”, cuyo régimen es distinto al edificado para la “*inscripción de la demanda*”. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

“Es preciso acotar que, uno de los elementos distintivos del último de los citados gravámenes es su carácter restringido con relación a los establecidos de antaño en el ordenamiento procesal civil, por tanto, requieren de un estudio minucioso sobre las particularidades que rodean el caso en el cual se solicita su imposición.

“Las cautelas continúan siendo, como en el anterior Estatuto Adjetivo Civil, la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro, el embargo y/o el secuestro; empero, además, se establece la procedencia de las llamadas innominadas y las previstas para los “procesos de familia” (art. 598, C.G.P.), al lado de algunas otras, específicamente autorizadas a lo largo del ordenamiento.

“Esa clasificación demuestra la existencia de una regulación propia para cada tipo de medida e impide concluir que para el decreto de la inscripción de la demanda en asuntos como el aquí debatido, se deba exigir el mismo examen minucioso requerido para la prosperidad de una innominada, pues, de haber querido ello, el legislador, por un lado, así lo habría indicado en la respectiva norma y, por el otro, nada habría precisado taxativamente en torno a la pertinencia y demás características de esa disposición preventiva en los procesos de responsabilidad civil donde se persiga el pago de perjuicios.

Como se observa, el legislador circunscribió los requisitos para la inscripción de la demanda, a los señalados en las disposiciones transcritas; de modo que no consideró necesario imponer el estudio de la “apariencia del buen derecho” ni los demás requisitos previstos en el inciso tercero del literal c) para su acogimiento en los temas o asuntos donde se admite su petición y decreto, como en los de responsabilidad civil.

Lo dicho fulge límpido de la reciente historia del gravamen en cuestión, analizado comparativamente, entre la anterior legislación y la nueva, según la transcripción. No se ha contemplado explícitamente en el

pasado, ni se evidencia en el C. G. del P. para la inscripción de la demanda esa exigencia; sólo aparece en la estructura del literal c) para las cautelas innominadas, es decir, para aquéllas que carecen de nombre o de designación específica; como lo expresa la Real Academia Española –RAE- “(...) Innominado(a): Que no tiene nombre especial (...)”¹. STC9822 de 2020...²

4. Finalmente, ha de recordar el recurrente, que tuvo a su alcance la posibilidad de solicitar la cancelación de dichos registros, en los términos descritos en el inciso 3º del literal b del canon 590 adjetivo, según el cual: *“Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo (...)”*, petición que fue atendida por el a quo.

III. DECISION

Por lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, CONFIRMA** el auto apelado de fecha y naturaleza indicada en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado

¹ Real Academia Española –RAE-. Diccionario de la lengua española, Edición del Tricentenario [En Línea]. Actualización 2018 [25 de octubre de 2019]. Disponible en la Web: <https://dle.rae.es/?id=Lgshf22>

² Citada en STC4557 de 2021

Firmado Por:

Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

66e8b6bac9a9f64afaaef9dae491e03f526aa42dadcf4ef1b668a
a5ab203e23

Documento generado en 14/10/2021 09:01:10 a. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>